



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, Noviembre 3 de 2023

Radicado: 05001 31 05 006 2021 00158 01
Demandante: OLGA LUCIA HERNÁNDEZ OCHOA.
Demandados: COLPENSIONES, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA Y JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ.
Asunto: CONSULTA
Tema: PENSIÓN INVALIDEZ.

La Sala Sexta de decisión, presidida por la magistrada ponente **LILIANA MARIA CASTAÑEDA DUQUE**, e integrada por las magistradas **ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

1. ANTECEDENTES.

De la demanda presentada.¹

Lo pretendido inicialmente por la parte actora con su demanda es que se deje sin efectos los dictámenes emitidos por COLPENSIONES, la Junta Regional de Calificación y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que en última instancia determinaron que la señora Hernández Ochoa un 39.14% de pérdida de capacidad laboral estructurada el 03 de mayo de 2017.

¹ 01PrimeraInstancia. Archivo 02 del expediente digital.

Solicitó se ordenara y practicara una nueva calificación de pérdida de capacidad laboral, y con base a esta experticia se ordenara a COLPENSIONES, a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y a la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ asumieran el pago de los honorarios generados por la nueva calificación, y por consiguiente si se llegare a determinar demandante tiene más del 50% de pérdida de capacidad laboral, se ordene a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de forma retroactiva e indexada.

Como sustento a esas solicitudes indicó que la señora OLGA LUCIA HERNÁNDEZ OCHOA nació el 23 de diciembre de 1964 y para el momento de la radicación de la demanda contaba con 56 años, encontrándose afiliada a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-.

Que producto de múltiples patologías inició un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral ante COLPENSIONES quien en primera instancia determinó que tenía un 30.51% de pérdida de capacidad con fecha de estructuración 03 de mayo de 2017.

Que posteriormente la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ determinaron en cada instancia un 39.13% de pérdida de capacidad con fecha de estructuración 03 de mayo de 2017.

Finalmente la parte actora que no se encuentra de acuerdo con dichas experticias argumentando no tener en cuenta todas sus patologías y la “gravidez” de las mismas.

De la respuesta a la demanda.

Por parte de COLPENSIONES².

Esta entidad dentro del término anteriormente reseñado se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentado que las valoraciones cuestionadas por la accionante fueron realizadas por las instituciones pertenecientes al sistema general de seguridad social, por lo que considera que ésta debió acudir a la revisión de su estado de invalidez y no acudir a un proceso judicial sin una prueba científica.

² 01PrimeraInstancia. Archivo 09 del expediente digital.

Por parte de la Junta Regional.³

Esta entidad arrimó escrito de manera extemporánea por lo que la A-quo tuvo como indicio grave tal situación.

Por parte de la Junta Nacional.⁴

Esta parte se opuso a la prosperidad de las pretensiones del escrito genitor indicando que la decisión emitida por esa entidad cuenta con pleno soporte probatorio al guardar concordancia con las disposiciones legales y técnicas que rigen la calificación del porcentaje de pérdida de capacidad laboral de acuerdo a la condición real del paciente para la fecha de calificación.

De la sentencia de primera instancia.⁵

En sentencia de primera instancia el día 31 de octubre de 2022 el JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN:

*“Primero. Absolver a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, de las pretensiones formulas en su contra por la señora Olga Lucia Hernández Ochoa.
Segundo. Las excepciones propuestas contra la demanda quedan resueltas implícitamente con las consideraciones para este proveído.
Tercero. No hay condena en costas.”*

2. DE LA CONTROVERSIA EN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

Ninguna de las partes presentó recurso en contra de la decisión de la A-quo, por lo que al ser una sentencia totalmente adversa a los intereses de la demandante se conocerá el presente proceso en el Grado Jurisdiccional de Consulta.

³ 01PrimeraInstancia. Archivos 12-13 del expediente digital.

⁴ 01PrimeraInstancia. Archivo 11 del expediente digital.

⁵ 01PrimeraInstancia.Archivos 25-26-27-28 del expediente digital.

3. ALEGATOS

Concedido el término que establecía el artículo 13 la Ley 2213 de 2022, el apoderado de la parte demandante arrió escrito solicitando se ordenara la práctica de un dictamen de pérdida de capacidad laboral que determinara que la demandante es invalida y consecuencial a esto se revoque la decisión de la A-quo y se acceda a las pretensiones de la demanda.

4. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, en el presente evento se encuentra por fuera de discusión que:

- 1) Que la señora OLGA LUCIA HERNÁNDEZ OCHOA nació el 23 de diciembre de 1964.
- 2) Que COLPENSIONES a través de dictamen N° 201722071SDD del 14 de junio de 2017 determinó que la señora Hernández Ochoa tenía un 30.51% de pérdida de capacidad laboral estructurada el día 3 de mayo de 2017.
Dicho porcentaje fue determinado con base a las deficiencias de la Columna vertebral, así como enfermedades del tejido conectivo que involucran el sistema osteomuscular; es este caso, producto de una artritis reumatoide no especificada, una cervicalgia y un lumbago con ciática.
- 3) Que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia mediante dictamen N° 070167-2017 de fecha 15 de diciembre de 2017 determinó que la demandante tiene un 39.13% de pérdida de capacidad laboral estructurada el 03 de mayo de 2017.
En esta oportunidad dicho porcentaje fue hallado con base a las deficiencias por enfermedades del tejido conectivo que involucra el sistema osteomuscular, lesión en los segmentos móviles de la columna cervical y lumbar, y en este momento fue valorada una artritis reumatoide no especificada, una cervicalgia, dolor crónico intratable, leiomioma del útero sin otra especificación, lumbago no especificado.
- 4) Que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez mediante dictamen N° 43083219-2662 del 08 de febrero de 2019 confirmó la decisión tomada por la Junta regional en todos sus aspectos y fundamentos.

Teniendo presente el Grado Jurisdiccional de Consulta reconocido a favor de la demandante, esta Sala de Decisión centrará su análisis en los siguientes aspectos i) La causación y disfrute de la pensión de invalidez. ii) El caso en concreto.

Inicialmente debe indicarse que las presentes consideraciones se basan en las pruebas legal y oportunamente allegadas por las partes⁶, además su valoración en conjunto llevó a la formación del convencimiento de la Sala⁷ de las circunstancias planteadas tanto en la demanda como en su contestación.

i) **La causación y disfrute de la pensión de invalidez.**

Establece el artículo 40 de la Ley 100 de 1993 que habrá lugar al pago de la misma desde que el afiliado pierde la capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 50%, sin que otras condiciones, como lo fuere la continuidad de las cotizaciones al sistema pensional⁸.

Al respecto el artículo 3 del Decreto 1507 de 2014, por medio del cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral Ocupacional, define la invalidez como *“la pérdida de la capacidad laboral o ocupacional igual o superior al 50%.”*

Esta prestación tiene como *“finalidad proteger el derecho a la seguridad social y al mínimo vital y, en consecuencia, a la vida digna de las personas en condición de discapacidad, toda vez que esta mesada pensional se convierte en su única fuente de ingresos, los cuales le permitirán suplir sus necesidades básicas, al momento en el que su condición física, mental, intelectual o sensorial le impidan valerse por sí mismo.”* (Sentencia T-040 de 2019)

⁶ Ibídem. Artículo 60. **ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS.** *El juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo.*

⁷ Ibídem. Artículo 61. **“ARTICULO 61. LIBRE FORMACION DEL CONVENCIMIENTO.** *El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.”*

⁸ Cfr Sentencia SL-619 de 2013, SL-630 de 2013, SL-1562 de 2019 y SI-2026 de 2020.

Lo primero que debe aclarar el Despacho es que, en materia de pensión de invalidez del origen el estudio de su causación se determina por la norma que se encuentre vigente al momento de la estructuración de la invalidez.

Y para mayor claridad, la fecha de estructuración se define, como *“la fecha en que la persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determinar con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos...”* (artículo 3 del decreto 1507 de 2014).

Para el presente asunto, al pretenderse el reconocimiento de una pensión de invalidez donde para este momento se cuenta con una fecha de estructuración con posterioridad al año 2017 debemos remitirnos al contenido del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas con la Ley 860 de 2003, esto es, que el afiliado debe tener cotizadas 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración o anteriores al hecho causante, ello con base a si la invalidez la causa una enfermedad o un accidente respectivamente.

Dicho esto, para que un afiliado acredite el derecho a una pensión de invalidez dentro del Sistema General de Pensiones, debe reunir los siguientes supuestos:

- Que sea declarado invalido, es decir, con un 50% o más, de pérdida de capacidad laboral, por una entidad autorizada de conformidad con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993.
- Que la invalidez sea considerada o catalogada como de origen común.
- Que tenga 50 semanas cotizadas dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez o del hecho causante.

De NO acreditarse el 50% de pérdida de capacidad laboral, un afiliado al sistema pensional, no tiene derecho a prestaciones subsidiarias o complementarias dentro de esta normativa.

No obstante lo anterior, es pertinente señalar que los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 16 y 19 de la Ley 1562 de 2012 respectivamente, establecen que las juntas de calificación de invalidez *“son organismos del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de*

Trabajo con personería jurídica”, y su objetivo es calificar las deficiencias de los afiliados en las respectivas oportunidades, con la finalidad de determinar si resulta viable el reconocimiento o no de una prestación por parte del sistema pensional

Por su parte la Corte Constitucional en sentencia C-1002 de 2004 indicó sobre el objeto de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por las juntas de calificación resultan ser “...la pieza necesaria para la expedición del acto administrativo de reconocimiento o denegación de la pensión, propiamente dicho...”.

Aclarando en esa misma providencia que éstos “no tienen la virtud de resolver de manera definitiva las controversias surgidas en torno al grado de invalidez ni de producir efectos de cosa juzgada, dado que ello solo ocurre con el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado que implica el desarrollo de una serie de actos procesales que culminan en la expedición de un acto final -la sentencia-, llamado a definir el punto controvertido con fuerza de verdad legal...”

Por lo que más adelante sostuvo en esa misma providencia que “...la negativa parcial o total de la pensión de invalidez es, en esencia, un conflicto jurídico y como tal, su conocimiento está atribuido por la Constitución Política y por la propia ley laboral al juez del trabajo (artículo 2° del CPL). La jurisdicción, como facultad del Estado para dirimir los conflictos, corresponde a los órganos judiciales y no puede ser transferido a los particulares, como son las Juntas en cuestión, dado que ellos no administran justicia”.

En este mismo sentido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que los dictámenes que profieran las juntas de calificación pueden controvertirse ante los jueces del trabajo, quienes tienen la competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante, al respecto sostuvo en sentencia SL- 29622 de 2006, SL 5280 de 2018 y SL 2349 de 2021 lo siguiente:

“...Ciertamente, la Corte ha estimado que en la actualidad el estado de invalidez de un trabajador corresponde establecerse mediante la valoración científica de las juntas de Calificación, a través del procedimiento señalado en los reglamentos dictados por el Gobierno Nacional. Pero la Sala de Casación Laboral no ha sostenido que los parámetros señalados en el dictamen de la Junta sean intocables (...) De ninguna manera ha considerado la Corte que los hechos relativos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre el hecho genitor de la minusvalía, tenidos en cuenta por uno de tales entes, o por ambos si se agotan las dos instancias, sean materia incontrovertible ante la jurisdicción del trabajo (...) Reitera la Corte, entonces, su criterio ya decantado de que los

jueces del trabajo y de la seguridad social sí tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías...”

Dicho lo anterior, es claro que los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por el fondo de pensiones, así como por las juntas regionales y nacionales de calificación de invalidez pueden ser controvertidos judicialmente, recalando que para ello emitir un cuestionamiento, cada parte debe acreditar los hechos que sustentan sus pretensiones. De acuerdo con la línea trazada, esta Sala de Decisión realizará un análisis del caso *sub examine*.

5. DEL CASO EN CONCRETO

Con estas premisas legales y jurisprudenciales se descende al caso en particular hallando que conforme al análisis de toda la prueba documental, la demandante en efecto inició un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral con base en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, esto es inicialmente por parte de COLPENSIONES, luego ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez y en última instancia administrativa a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

Ahora dicha decisión no resulta inmutable en el tiempo, pues la misma normativa habilita que “*contra dichas decisiones proceden las acciones legales*” y tal como fue analizado anteriormente, el juez de trabajo puede controvertir las decisiones tomadas por esas entidades en el marco de un proceso.

Es por ello que se destaca que en el presente asunto, no existe discusión sobre la existencia de 3 experticias proferidas a favor de la demandante que resultan ser:

1. Dictamen N° 201722071SDD del 14 de fecha junio de 2017 emitido por COLPENSIONES quien determinó que la señora Hernández Ochoa tenía un 30.51% de pérdida de capacidad laboral estructurada el día 3 de mayo de 2017.
2. Dictamen N° 070167-2017 de fecha 15 de diciembre de 2017 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia quien determinó que la

demandante tenía un 39.13% de pérdida de capacidad laboral estructurada el 03 de mayo de 2017.

3. Dictamen N° 43083219-2662 de fecha 08 de febrero de 2019 proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, quien confirmó los valores relacionados anteriormente.

Sobre estos dictámenes de pérdida de capacidad existe una firmeza que fue sostenida por todas las partes demandadas, al aseverar que se emitió cada decisión no solo con fundamento legal y sino también clínico por lo que consideran que no hay lugar a cuestionar tales experticias.

Es decir, que al tratarse de desvirtuar dichas experticias recae sobre la demandante la carga de la prueba, esto es, que en efecto las entidades del sistema de seguridad social incurrieron en un error de tal magnitud que lesiona el derecho de la afiliada a acceder a una pensión de invalidez.

Lo anterior obedece a que, si bien los dictámenes de pérdida de capacidad laboral no son pruebas solemnes ni inmutables, ya que sus conclusiones pueden ser debatidas judicialmente, donde el funcionario judicial podrá arribar a una conclusión diferente a la dictaminada por los entes relacionados, valiéndose de criterios especializados.

Se precisa que no corresponde al funcionario judicial emitir un concepto médico respecto a la condición de salud, ni verificar aquella experticia que cerró el ciclo de valoraciones para señalar que esta quedó en firme, sino que apoyado en las experticias técnicas, y bajo criterios de razonabilidad y justificación suficiente, puede tener la facultad de señalar cuál dictamen comprende todas las patologías demostradas en el trámite y explica de mejor forma las posibilidades de incursión profesional y/o ocupacional del ciudadano.

En el presente asunto, considera esta Sala de Decisión Laboral que la parte demandante no logró acreditar ningún tipo de circunstancia que permita inferir al juez laboral que en efecto tiene más de un 50% de pérdida de capacidad laboral o incluso un porcentaje diferente al determinado en última instancia por parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

Las afirmaciones genéricas expuestas en el fundamento fáctico de la demanda donde se indica que la pasiva no se asignó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral

acorde al estado de salud de la señora Hernández Ochoa, para esta Sala no tienen algún sustento dentro del plenario a través de un medio probatorio que acredite tales supuestos.

Si bien fue allegado con la demanda la historia clínica de la demandante, con este solo documento no se logra acreditar un error protuberante en los dictámenes de pérdida de capacidad ya reseñados, pues se reitera, la laboral del juez en este tipo de procesos no corresponde al funcionario judicial emitir un concepto médico respecto a la condición de salud, ni verificar aquella experticia que cerró el ciclo de valoraciones para señalar que esta quedó en firme, sino que apoyado en las experticias técnicas, y bajo criterios de razonabilidad y justificación suficiente, situaciones que resultan carentes en este proceso.

Ahora, no se desconoce que la parte actora dentro de las pretensiones de la demanda solicitó se practicara una nueva valoración con la finalidad de determinar si la demandante adquirió más de un 50% de pérdida de capacidad laboral, sin embargo, la A-quo no accedió al decreto oficioso de un dictamen de pérdida de capacidad laboral al considerar que el escrito genitor no atacaba los dictámenes que estaban en firme, sino que la finalidad de esa pretensiones era efectuar una nueva valoración del estado de salud de la demandante, decisión sobre la cual el apoderado de la parte demandante no realizó ningún tipo de cuestionamiento y optó por guardar silencio.

En igual sentido en los alegatos de conclusión de segunda instancia el apoderado de la parte demandante solicitó un amparo de pobreza y que por ende, debía practicarse un dictamen pericial con el ánimo de determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la actora y en el evento de que sea superior al 50% se revocara la sentencia y se accedieran a las pretensiones de la demanda.

Por esta razón analizado el expediente de primera instancia, si bien la parte actora elevó una solicitud de amparo de pobreza con su demanda, la A-quo nada dijo sobre este beneficio procesal en su momento oportuno y menos aún la parte demandante cuestionó la ausencia de la decisión, por lo que no puede pretender que en segunda instancia se reabra no solo un nuevo debate probatorio, sino que además el juez recaude los medios de prueba pertinentes, útiles y necesarios para que salgan avantes las pretensiones de la demanda, cuando no fueron si quiera ejercidos los recursos y mecanismos procesales en tiempo durante la primera instancia, silencio que otorgó

firmeza a tales decisiones, las cuales a hoy se encuentran precluidas. Adicionalmente debe indicarse que los efectos del amparo de pobreza operan a futuro, por lo que no tiene efectos retroactivos y menos aún la finalidad de suplir cargas probatorias.

De esta manera lo que pretende el apoderado de la demandante con sus alegatos de conclusión en la segunda instancia es que la autoridad judicial supla la carencia de material probatorio, el que según las voces del Código General del Proceso debía ser el dictamen aportado incluso con la presentación de la demanda, siendo éste un deber procesal que incumbe a cada parte de probar los supuestos de hecho de las normas que invoca sean aplicadas.

En este orden de ideas, al encontrarnos en este panorama donde la parte actora no logró acreditar un porcentaje de pérdida de capacidad laboral distinto al concluido en última instancia por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, donde le asignó a la señora Hernández Ochoa un 39.13% de PCL estructurada el 3 de mayo de 2017, se concluye que ésta no es una persona jurídicamente inválida, no habiendo lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez.

Por todo lo anterior, se confirmará la decisión de la A-quo. Sin costas en esta instancia por conocerse por el Grado Jurisdiccional de Consulta.

6.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide:

Primero: CONFIRMAR la sentencia emitida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín de fecha 31 de octubre de 2022.

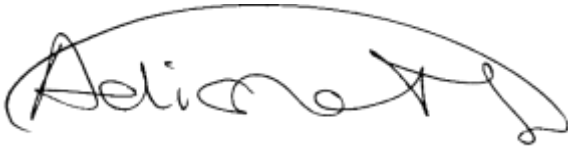
Segundo: Sin costas en esta instancia.

Se ordena la notificación mediante EDICTO y vencido el término se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen. Se termina la audiencia y en constancia se firma por quienes intervinieron.

Las Magistradas,



LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE



ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ